

Patrimonio, ¿qué viene?

Carlos Maillet

Exdirector del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural



La discusión en torno a una nueva Ley de Patrimonio Cultural se ha instalado como una de las principales apuestas estructurales del sector. Las estimaciones técnicas disponibles indican que la puesta en marcha de la ley implica un costo fiscal permanente que fluctúa entre los 9.000 y 23.000 millones de pesos anuales, junto con un incremento significativo de dotación pública que va entre los 140 a 190 nuevos funcionarios a nivel nacional. A ello se suma una ampliación de la estructura colegiada y la incorporación de nuevas instancias de consulta sectorial, especialmente en proyectos de gran envergadura, lo que tensiona los tiempos de tramitación y complejiza la toma de decisiones. Este escenario no solo desafía la capacidad operativa del sistema patrimonial, sino que entra en fricción con el mandato político expresado por la ciudadanía en los últimos procesos electorales: mayor eficiencia estatal, racionalización del gasto público y un Estado más coordinado y funcional.

Desde esta perspectiva, la reforma del

Consejo de Monumentos Nacionales no puede seguir entendiéndose como un ajuste procedimental. Requiere una redefinición de su rol, de su composición técnica y de su capacidad resolutoria, particularmente en el ámbito territorial. Hoy gran parte del cuello de botella patrimonial se explica por la debilidad de las direcciones regionales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, que operan con dotaciones mínimas, alta rotación profesional y escasa capacidad técnica para evaluar proyectos complejos. Sin un fortalecimiento real de estas unidades —en personal especializado, atribuciones y herramientas— cualquier intento de modernización corre el riesgo de trasladar la permisología desde el nivel central hacia las regiones.

A ello se suma una tensión institucional no resuelta: la coexistencia de una subsecretaría que diseña políticas públicas y un servicio que continúa operando bajo lógicas heredadas de la exDIBAM. Esta dualidad ha permitido ciertos avances, pero también ha generado descoordinaciones persistentes, superposición

de funciones y una brecha estructural entre planificación estratégica y ejecución efectiva. El próximo Gobierno deberá asumir que, sin una conducción política clara desde el ministerio, no habrá coherencia ni eficiencia real.

Un tercer nudo crítico es presupuestario. Museos, bibliotecas, archivos y sitios históricos presentan déficits acumulados de mantenimiento, seguridad y actualización normativa, mientras la inversión sigue siendo puntualizada y fragmentada.

El próximo Gobierno no deberá clarificar su relato, desafío que se vuelve especialmente relevante considerando que el período que concluye ha mostrado avances limitados en materia patrimonial. Si se habla de “gobierno de emergencia” o de “unidad nacional”, el patrimonio no puede quedar reducido a un discurso celebratorio ni a una agenda de mera continuidad administrativa. La pregunta de fondo es otra: ¿qué idea de patrimonio y cultura articula el proyecto país que se quiere construir? Eso exige menos épica y más institucionalidad.

“El período que concluye ha mostrado avances limitados en materia patrimonial”.

María Gabriela Huidobro

Historiadora y académica UNAB



El «Decreto Amunátegui»

Hace exactos 149 años —el 6 de febrero de 1877— el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, firmó el decreto 547 que cambió el curso de la historia para las mujeres —y hombres— en el país. Más conocido como «Decreto Amunátegui», este documento reconocía la necesidad de estimular el estudio entre las chilenas para permitirles su propia subsistencia, validando así su derecho a rendir los exámenes de admisión universitaria. Es probable que ni el Presidente Aníbal Pinto, ni el mismo Amunátegui, hayan podido dimensionar la transformación social, cultural, política y económica que esta firma detonaría para Chile. Hoy, más de la mitad de los postulantes que rinde la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) son mujeres —130 mil registradas en 2025—. Aun cuando persiste el desafío público de incentivar la participación femenina en áreas como las STEM, el impacto de este decreto ha sido sustantivo, y por eso, su conmemoración debería tener un lugar relevante en nuestro calendario.

El decreto no sólo fue un gesto político que respondía a la creciente tendencia liberal del país, sino, sobre todo, simbolizó un giro cultural trascendental: reconoció de manera oficial y pública que las mujeres tenemos la capacidad intelectual y de razonamiento científico para formarnos en materias académicas y que esta instrucción puede resultar tan relevante para nosotras como para los varones. Sus alcances, por lo tanto, fueron mucho más allá del ámbito universitario: nos encaminaron hacia la conformación y reconocimiento de una ciudadanía en plenitud. Esto, en última instancia, despejó las vías para la conquista de derechos civiles y políticos, como aquellos referidos a la seguridad social, la capacidad de autonomía en materia de decisiones económicas, el derecho a voto y el acceso a cargos de responsabilidad pública.

En su época, el «Decreto Amunátegui» no estuvo exento de polémica. Muchos opinaron que su aprobación amenazaba la estabilidad del hogar o de la familia y que ponía en riesgo la integridad moral de las mismas mujeres. Su firma, sin embargo, constituyó un acto decisivo y atrevido, que demuestra que, en materias de políticas públicas, se requiere ver más allá de la contingencia y de las miradas estrechas enfocadas solo en el presente.

Una IA con identidad común

Aldo Valle

Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación



América Latina ha sido históricamente una región consumidora de tecnologías desarrolladas en otros lugares del mundo. En inteligencia artificial (IA), esa dependencia se traduce en sistemas entrenados con datos que poco saben de nuestras realidades, lenguas, memorias y urgencias del presente. Algoritmos eficientes, pero culturalmente ajenos; potentes, pero incapaces de comprender los matices que definen a nuestras sociedades e historia. En ese escenario, el Presidente Gabriel Boric adoptó una decisión política clara e innovadora al impulsar «Latam-GPT», un modelo de lenguaje propio, colaborativo, entrenado con datos locales, abierto, público e inclusivo, que verá la luz el próximo 10 de febrero, como señal de que América Latina quiere ser protagonista de esta transformación.

Que este esfuerzo sea liderado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), con el respaldo del Ministerio de

Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, es también una señal de nuestro desarrollo tecnológico e institucional. Chile asumió un rol articulador que va más allá de capacidades técnicas, ya que convocó y coordinó a distintos países para que se sumarán como socios activos de una infraestructura estratégica para el futuro digital latinoamericano.

La firma de memorándums de entendimiento con Brasil —primer país en formalizar su incorporación—, y luego con República Dominicana, México, Perú, Costa Rica y Panamá, demuestra que «Latam GPT» no es solo un proyecto más, sino una apuesta por la soberanía tecnológica y la colaboración regional. Estos acuerdos establecen un marco para el intercambio de datos, capacidades y metodologías; la construcción de colecciones que refleje la diversidad cultural y lingüística; y la promoción de una inteligencia artificial ética,

transparente, segura y responsable. En otras palabras, una arquitectura regional para que la IA esté al servicio de las personas.

Chile, en este contexto, se posiciona como un nodo de convergencia en esta parte del mundo. No impone un modelo, sino que impulsa un espacio común donde

“«Latam-GPT» expresa la convicción de que América Latina puede dejar de ser únicamente usuaria de tecnologías globales”.

cada país aporta su identidad, saberes y prioridades. Ese liderazgo es coherente con una visión que entiende de la inteligencia artificial como un bien público, capaz de impulsar la innovación y generar soluciones para la educación, la salud, las políticas públicas y el desarrollo productivo con sentido territorial.

«Latam-GPT» expresa la convicción de que América Latina puede dejar de ser únicamente usuaria de tecnologías globales, para convertirse en creadora de herramientas con sello propio. Que Chile esté empujando esa conversación, habla de un liderazgo como país que busca construir un futuro en común.